

Uchuraccay: La herida que aún no cierra

Hace 23 años murieron ocho periodistas linchados en Uchuraccay. La autoría del delito generó una guerra mediática y la violencia de la época los convirtió en mártires del oficio con un proceso judicial sin concluir.



Las múltiples muertes que se dieron en Ayacucho y sus alrededores dejaron familias enteras en la desesperación. La pobreza, el hambre y el olvido del gobierno generó un movimiento armado terrorista. La búsqueda de la noticia de ocho periodistas terminó en una masacre en Uchuraccay. El suceso causó conmoción y pronto se generaron controversias alrededor de éste. Comuneros y militares fueron acusados en base a diferentes teorías y testimonios. Existieron tres informes al respecto. Familiares y medios se resistieron a creer en sus conclusiones. Lo cierto es que ese pueblo desapareció y solo hasta 1993 una nueva generación de uchuracainos regresó al lugar. Cada año se realiza el Encuentro de Paz y la Reconciliación Nacional en conmemoración a la muerte de los periodistas. A continuación, un informe que enlaza declaraciones y conclusiones de una herida aún abierta del periodismo.

La guerra que desató el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso (PCP SL) acabó con cientos de vidas y desangró un pueblo ahondando diferencias y confusiones en un país maquillado de transparencia y democracia para el cual solo existía la capital.

Sendero Luminoso, proclamaba la demolición del viejo estado al que tildaban de indiferente, burocrático, preocupado solamente por contentar a las élites de la época. Esgrimían como argumento que el gobierno del presidente Fernando Belaunde Terry se había olvidado de las provincias más pobres, que eran sometidas a los abusos de los más fuertes. Llevaban al marxismo leninismo maoísmo como insignia de su partido. La cabeza era Abimael Guzmán, o presidente Gonzalo denominado como el pensamiento guía.

“Sendero Luminoso, proclamaba la demolición del viejo estado al que tildaban de indiferente, preocupado por contentar a las élites de la época”.

La comunidad de Uchuraccay está ubicada a cuatro mil metros sobre el nivel del mar. Pertenece a la provincia de Huanta y fue catalogada por Sendero Luminoso como un corredor estratégico para sus actividades entre los valles y la ceja de selva ayacuchana.

De acuerdo al informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), existe un manuscrito senderista en el cual se afirma que Uchuraccay era base de apoyo desde 1981. Sin embargo la comunidad no aceptaba del todo a los senderistas que buscaban implantar su doctrina entre jóvenes y mujeres. El presidente de la comunidad, Alejandro Huamán Leandro junto con otros comuneros decidieron oponerse a las prácticas senderistas^[1].

La respuesta de Sendero Luminoso fue matar a Huamán y otros dirigentes de comunidades vecinas. Entonces deciden conformar un fuerte para defenderse del terror. Es así que el 21 de enero mataron siete miembros del PCP SL en Huaychao.

Este hecho trascendió a los medios y la acción campesina fue apoyada por el general Clemente Noel, Jefe del Comando Político Militar de la zona y el presidente de la República.

LA MATANZA

En el afán por conseguir la primicia, pues por primera vez los comuneros habían matado terroristas, los periodistas Eduardo de la Piniella, Pedro Sánchez, Jorge Luis Mendívil y Willy Retto de El Observador, Jorge Sedano de La República y Amador García de la revista Oiga parten a las 6.05 de la mañana de Ayacucho el 26 de enero de 1983.

Después se unirían los corresponsales ayacuchanos Félix Gavilán, del Diario de Marka, y Octavio Infante del diario Noticias. Pasaron por varios controles militares y policiales, para llegar a la casa de quien sería su guía, Juan Argumedo, medio hermano de Octavio Infante. Argumedo los dejaría a una distancia prudente desde la cual no podrían perderse. Sin embargo, nadie les advirtió del peligro.

“La matanza fue cruel y no duró más que 30 minutos, luego fueron enterrados en cuatro fosas de dos en dos”

Una vez en Uchuraccay, los hombres de prensa fueron interceptados por un grupo de campesinos, quienes convocaron al resto de la comunidad para luego darles muerte. En medio de la confusión, los gritos y los empujones intentaron explicar que no eran terroristas. Pero el diálogo fue imposible.

Los periodistas buscaron la mediación de un joven de la comunidad, quien vestía

ropa de ciudad y hablaba castellano, para que les hiciera comprender a los comuneros el motivo de su visita. Sin embargo, no fue posible.

Ante esto, los periodistas piden a ser entregados a la policía de Tambo, pero cuando parecía haberse llegado a ese acuerdo, Silvio Chávez Soto, secretario de la comunidad, ordenó matarlos convencido de haber capturado a terroristas.

La matanza fue cruel y no duró más que 30 minutos, luego fueron enterrados en cuatro fosas de dos en dos. Esa misma noche mataron al guía Juan Argumedo y a Severino Huáscar Morales. A este último, por su vínculo con Sendero Luminoso, lo responsabilizaron por defender a los periodistas y al guía.[\[2\]](#)

EL HALLAZGO

El 28 de enero dos patrullas se dirigieron hacia Uchuraccay al mando del Teniente de la Armada Peruana, Ismael Bravo Reid y el Teniente de la Guardia Civil, Hugo Vidal Ulloa.

Las autoridades de la comunidad les comunicaron que habían dado muerte a ocho senderistas y les dieron sus pertenencias: una bandera roja, un teleobjetivo, doce rollos de películas y algunas prendas de vestir. Las patrullas se retiraron para dar sus informes.

Una segunda patrulla al mando del Capitán Guardia Civil, Novato Soto Barreda fue a la comunidad y fue informada de las muertes y a su vez el Mayor FAP Jorge Ernesto Barboza Salaverry constató la existencia de las tumbas. El 29 de enero a las siete de la noche estaba confirmada la muerte de los ocho a manos de los comuneros.

HIPÓTESIS

El misterio de estas muertes radica en las diferentes teorías tanto oficiales como de los medios de comunicación y hasta de los mismos familiares en la desesperación de encontrar responsables del crimen.

La autoría de la masacre recae, según fuentes oficiales y periodistas, en los comuneros. Los habitantes de esta zona vivían a la defensiva, matando senderistas que sembraban el terror, que se llevaban a sus mujeres y niños ya sea para convertirlos en militantes, sirvientes o para entretenerse. Los comuneros no veían otra salida, debían defenderse de alguna manera.

Sin embargo existe una teoría que apunta hacia el Ejército. El 12 de octubre de 1982 fueron declaradas en emergencia las provincias de Huamanga, Huanta, Cangallo, La Mar y Víctor Fajardo por el decreto supremo 026-81 IN. El 29 de

diciembre las Fuerzas Armadas asumen el control interno de estas provincias. El general Roberto Clemente Noel Moral fue nombrado Jefe del Comando Político Militar de la zona. Además la infantería de Marina asumió el control de la provincia de Huanta durante las primeras semanas de enero de 1983.

En la primera hipótesis se afirma que los comuneros confundieron a periodistas con terroristas sin embargo en la segunda posición se le atribuye responsabilidad al Ejército que según familiares y los diarios izquierdistas de la época se encontraban infiltrados dentro de la comunidad. La explicación a la segunda teoría recae en que las fuerzas del orden ocultaban crímenes atroces en la zona y los periodistas eran testigos desafortunados que no cumplirían con informar.

LAS INVESTIGACIONES

El asesinato de los periodistas generó tres investigaciones. La primera estuvo a cargo de la Comisión Investigadora de los Sucesos de Uchuraccay presidida por Mario Vargas Llosa, la cual determinó que fue un malentendido cultural y presentó al pueblo uchuraccaíno como atrasado y violento.

El silencio de los comuneros respecto del modo de ejecución de la masacre, motivado por su afán de ocultar la muerte del guía Juan Argumedo y del comunero Severino Huáscar Morales, impidió a la Comisión llegar a establecer los pormenores de lo ocurrido el 26 de enero, por lo cual el informe supuso, con convicción relativa, que los periodistas debieron ser atacados de improviso, masivamente, sin que mediara un diálogo previo.

El posterior hallazgo de las fotografías tomadas por Willy Retto demostró que dicha suposición era falsa, lo cual, para diversos sectores de la opinión pública, desacreditó el conjunto del informe, a pesar de que éste precisaba líneas abajo que no se puede descartar, tampoco, que este intento de diálogo se produjera y fuese inútil debido al exceso de suspicacias, pánico y furor de los comuneros o a alguna imprudencia o error en el curso de la conversación por parte de los periodistas que agravase el malentendido en vez de disiparlo.

La segunda investigación fue realizada por el poder judicial, mediante un proceso penal sumamente confuso y dilatado, cuyo fallo definitivo fue emitido el 9 de marzo de 1987, sentenciando por homicidio a los campesinos Dionisio Morales Pérez, Simeón Aucatoma Quispe y Mariano Ccasani Gonzáles, y ordenando la captura de otros 14 campesinos de Uchuraccay.

Finalmente, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) presidida por Salomón Lerner Febres designada el 4 de junio del 2001 por el gobierno transitorio de Valentín Paniagua, constató que la comunidad entendía el orden

jurídico y seguían un instinto natural de supervivencia.

Aunque se niega la presencia de miembros de las fuerzas del orden el 26 de enero en Uchuraccay, el informe señala que los campesinos fueron alentados a usar la violencia por los sinchis, quienes les indicaron los días previos que debían matar a todo terrorista que llegara al pueblo.

IRRESPONSABILIDAD MEDIÁTICA

“Quiero condenar la actitud irresponsable de los periodistas y medios que no han tratado con seriedad este tema a pesar que murieron nuestros colegas” sentencia Oscar Medrano^[3] quien investigó y cubrió masacres, atentados y enfrentamientos en Ayacucho entre los años 1980-2000. Es quechua-hablante y conoce la zona y a sus habitantes, él llegó junto a Gustavo Gorriti a Huaycho el día 27 de enero de 1983 en un helicóptero del Ejército.

Los comuneros estaban en guerra y no vivían en sus casas, ocupaban los cerros y había unos cuantos designados a ser vigilantes, estos avisaban si alguna columna senderista se acercaba. Los periodistas llegaron a una zona de emergencia. “Los atacaron y al no tener respuesta se crea la confusión” sostiene Medrano. A pesar de no estar seguros de haber interceptado senderistas, los encierran en el calabozo, algunos heridos otros ilesos.

Según una fuente presencial del periodista uno de los linchados, Jorge Sedano era mayor y robusto, estaba muy agitado y pedía socorro en el calabozo. Mientras las autoridades de la comunidad discutían, los vigías acusaron a Juan Argumedo de haberlos traído y fue llevado a su presencia. Al ver el cuadro Argumedo los increpó diciendo que el Ejército los mataría por agredir periodistas.

“Ellos acuerdan en la noche en sesión de comunidad darles muerte a todos y en la noche cavan las tumbas lo más profundo posible” asegura Medrano. Las declaraciones del periodista apuntan hacia una autoría en masa por parte de la comunidad. La Comisión Investigadora de los Sucesos de Uchuraccay corrobora las declaraciones de Medrano sin embargo fue tildada de “belaundista” al ser presidida por Mario Vargas Llosa.

“...fue un complot para que no salieran a la luz los delitos de militares en la comunidad...”

Los medios izquierdistas y los familiares quisieron otras explicaciones y sentenciaron a la comisión que según sus teorías solo dio conclusiones que tapaban las atrocidades de los militares. Olvidaron que la comisión también tenía otros integrantes como el periodista Mario Castro Arenas y el jurista Abraham Guzmán Figueroa. El equipo era conformado además por tres antropólogos, un

psicoanalista, un jurista y dos lingüistas.

El día que Medrano y Gorriti pisan Huaychao (27 de enero de 1983), se dan cuenta que las autoridades no están y preguntan por su paradero, los campesinos dicen que se había producido un enfrentamiento en Uchuraccay.

“Niños, ancianos todos eran culpables actuaron cohesionados por su teniente gobernador”. Los campesinos a pesar de saber que no eran terroristas aprovecharon las armas que tomaron de los terroristas que mataron una semana antes y las presentaron como pruebas de que habían actuado en defensa de su comunidad.

Por su parte, Oscar Retto, padre del asesinado fotógrafo Willy Retto, sostiene que el móvil del crimen fue impedir a los ocho hombres de prensa descubrir la verdad sobre la matanza de Huaychao, basándose en la teoría de que los senderistas victimados eran niños. Sin embargo, los comuneros y el propio camarada Juan quien dirigía el contingente senderistas atacado en dicho poblado, niegan tajantemente que dentro los militantes fallecidos hubiera niños.

Retto asegura que la confusión en las investigaciones la originó la Comisión Vargas Llosa pues el juicio se politizó porque nadie quería que salga la verdad. Según el veterano fotógrafo en esa zona no se podía pasar los controles policiales tan fácilmente por ser zona de emergencia, sin embargo ellos pasaron sin advertencia alguna.

Además agrega que fue un complot para que no salieran a la luz los delitos de militares en la comunidad. Según su versión había fuerzas del orden camuflados con trajes típicos de los comuneros los cuales incitaron a los campesinos a matar.

LA CONTROVERSIA

Uno de los puntos más controversiales del caso se halla en el motivo del viaje. Desde un principio, tanto en la comisión de Vargas Llosa, como la CVR y de acuerdo a los familiares de Juan Argumedo, los periodistas, querían viajar a Huaychao. Días antes, siete senderistas habían muertos a manos de los comuneros y trascendió que las víctimas eran niños.

De acuerdo, al periodista Ricardo Uceda, autor de Muerte en el Pentagonito, el periodista Mauro Montes confesó que Octavio Infante le pidió participar en un viaje para entrevistar al “jefe grandazo”, pues en aquellos años la prensa ansiaba conseguir una exclusiva con el líder terrorista, Abimael Guzmán.

Incluso, una de las víctimas, Eduardo de la Piniella, gestionó a través de Octavio Infante una entrevista en exclusiva con Sendero Luminoso días antes del crimen. “Tanto de la Pinella como Gavilán creían que Infante si tenía contactos con los

terroristas”[4].

Esta información incluso es corroborada por el fotógrafo Oscar Medrano, quien fue el primer reportero gráfico en llegar a Uchuraccay, tras la masacre.

Medrano, asegura que días antes del asesinato de Uchuraccay, él se encontraba en Huaychao junto a Gustavo Gorriti, recopilando todos los datos posibles sobre el asesinato de los siete senderistas. Medrano sabía que algunos colegas más llegarían a aquella comunidad.

Sin embargo, ya era viernes 25 de enero, y los hombres de prensa no arribaban. Por la noche, un redactor de La República, Armando Campos, le confiesa que los hombres de prensa que no llegaban iban a traer una información que iba a tener mucha resonancia, “quizá una entrevista”. [5]

No obstante, esta teoría tiene un punto débil. Juan, el jefe de la columna senderista diezmada por los pobladores de Huaychao en 1983, afirma que vio a los periodistas camino a Uchuraccay desde su refugio en las alturas. Sin embargo, Juan revela que los periodistas nunca hicieron contacto con ellos. Al menos, ningún miembro de su contingente se lo consultó. [6]

IRREGULARIDADES Y VACÍOS

En aquella época las Fuerzas Armadas se dividían en la Guardia Civil, la Guardia Republicana, La Policía, El Ejército, La Marina, y la Aviación. Durante su gestión en la guerra antisubversiva mataron miles de personas sin saber si eran terroristas o no.

Afirmar que hubo o no incitación antes o durante de la matanza es imposible sin embargo según la CVR el periodista ayacuchano Luis Morales de El Diario de Marka tomó declaraciones de los comuneros. Ellos aseguraban que los “sinchis”, agentes especiales de la Fuerzas Armadas, los habían visitado para decirles que los amigos solo venían por aire y por tierra venían los enemigos.

La CVR en sus conclusiones no logra corroborar la presencia de agentes del Ejército pero si los acusa de abandonar a esa gente en momentos del terror y de incitarlos a matar y tomar justicia en sus manos.

Los constantes ataques por parte de los terroristas a la comunidad la dispersan y asesinan uno por uno en diferentes situaciones. Los sobrevivientes huyeron a la selva y ciudades pero ocultaban su identidad a los que pudieron encontrar señalados a dedo fueron sometidos a juicio.

En el mismo informe de la CVR, el Poder Judicial y sus procesos para este caso fueron calificados como irregulares y llenos de vacío con penas a los supuestos culpables sin pruebas.

El 9 de marzo de 1987, el 8vo Tribunal correccional de Lima emite sentencia condenando a Dionisio Morales Pérez, Mariano Ccasani Gonzáles y Simeón Aucatoma Quispe, comuneros de Uchuraccay por el delito de homicidio simple a penas de diez, ocho y seis años de reclusión respectivamente.

Ante las condiciones de vida Simeón Aucatoma Quispe fallece de tuberculosis en el penal de Lurigancho y el 14 de junio de 1988, la Corte Suprema cambia la condena de los restantes a 15 años de prisión por el delito de homicidio agravado. Después de 23 años el proceso Uchuraccay sigue abierto en el 7mo Juzgado de Procesos en Reserva de Lima.

A MODO DE CONCLUSIÓN

La matanza de Uchuraccay, en enero de 1983, en la que ocho periodistas ofrendaron sus vidas en el cumplimiento de su labor informativa, dio al país indicios de la compleja naturaleza del conflicto y se convirtió en un amenazante ejemplo de los riesgos asociados al ejercicio libre del periodismo en los años por venir.

Fue precisamente como reacción a la matanza de los periodistas que por primera vez diversos sectores de la sociedad civil se vincularon entre sí para exigir la verdad. Pero fue también entonces cuando la ciudadanía percibió las inmensas dificultades de las instituciones oficiales para comprender la naturaleza del conflicto.

Ni la Comisión Investigadora de Vargas Llosa, formada por el Poder Ejecutivo, ni un prolongado proceso judicial posterior, respondieron a las expectativas de la ciudadanía por esclarecer los hechos, las responsabilidades y la naturaleza del conflicto que se iniciaba.

Al enorme riesgo del trabajo periodístico, que hacía difícil la documentación sobre lo que estaba ocurriendo, se añadió muy pronto la constatación de que los organismos del Estado que tenían la autoridad constitucional para investigar los crímenes no se encontraban a la altura de lo que exigía su misión.

Los organismos jurisdiccionales no cumplían con la función de poner en conocimiento del país lo que venía ocurriendo, y el clamor de las víctimas porque se investigasen los hechos no obtuvo respuesta.

“Uchuraccay es un referente emblemático de la violencia y el dolor en la memoria colectiva del país”

La muerte de los 135 uchuraccaínos, así como la desaparición de la comunidad por largos años, nunca alcanzaron notoriedad pública, quedando en la memoria privada de los familiares y comuneros hasta el 1 de junio de 2002, día en que la población entregó a los representantes de la CVR la Lista de uchuraccaínos asesinados elaborada en dos asambleas comunales.

Por todos estos sucesos, Uchuraccay es un referente emblemático de la violencia y el dolor en la memoria colectiva del país, así como de las demandas de justicia y verdad efectuadas durante todos estos años. Al olvido que durante veinte años recubrió la muerte de los comuneros, se suma el carácter controvertido de las investigaciones sobre la muerte de los periodistas.

Ya sea por incapacidad técnica o por falta de voluntad, ya sea por temor o por complicidad con la grave situación, la demanda de conocer la verdad no fue satisfecha por el Estado en los años del conflicto.

Hoy en día, los familiares de las víctimas siguen a la espera de respuestas que no llegan, no buscan una indemnización del Estado, sino sólo la verdad.

[1] Pp. 125-128 Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación

[2] Pp 135 Ib

[3] Entrevista a Oscar Medrano, Setiembre, 7, 2006

5 Pp. 62, UCEDA, Ricardo, Muerte en el Pentagonito, Planeta, Lima 2004.

[4] Ib

[5] Ib Entrevista a Oscar Medrano

[6] Pp. 74 UCEDA, Ricardo, Muerte en el Pentagonito, Planeta, Lima 2004.







Thursday, September 21, 2006